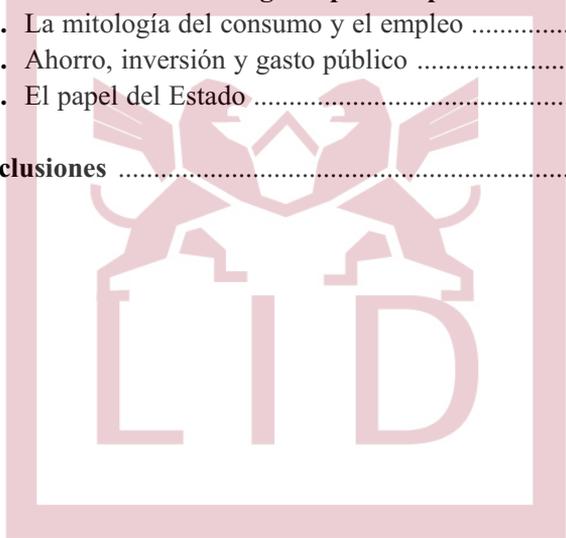


Índice

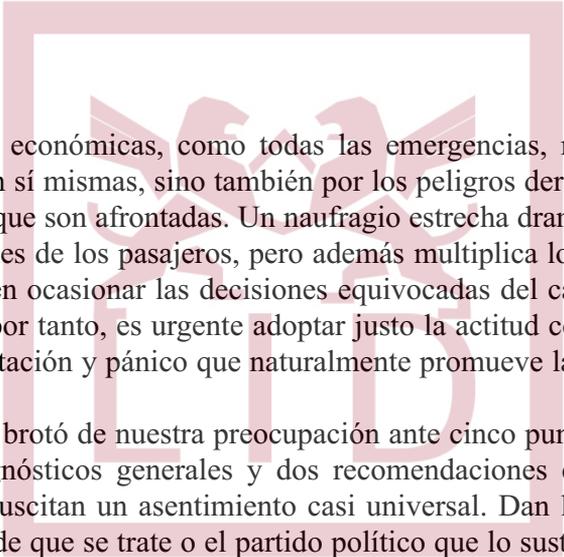
	Introducción	7
1	La culpa política de la crisis es del liberalismo	13
	1. El neoliberalismo	15
	2. Las claves liberales	18
	3. Cuestión de modelos	19
	4. La gran ficción del Estado ausente	21
	5. Estado mutante y creciente	25
	6. Y el culpable no es... ..	28
2	La culpa moral de la crisis es de la codicia	29
	1. <i>Auri sacra fames</i>	31
	2. Lo normal y lo pecaminoso	33
	3. La exuberancia racional	35
	4. El problema moral	37
3	La culpa económica de la crisis es del mercado libre	39
	1. El negocio bancario	42
	2. Los bancos centrales	43
	3. Un poco de contabilidad	45
	4. Los peligros del sistema	46
	5. Las finanzas y la economía real	48
	6. La gestación de la crisis	55

	7. Ni <i>ninja</i> ni <i>subprime</i>	60
	8. Bancos de inversión, aseguradoras y agencias de calificación	64
	9. El estallido de la crisis	68
	10. Deudas gigantes y colapsos bancarios	73
4	Es necesario rescatar a los bancos	91
	1. El miedo a una segunda Gran Depresión	93
	2. Tres modelos poco modélicos	96
	3. Una propuesta alternativa	103
5	Es necesario aumentar el gasto público para crear empleo	107
	1. La mitología del consumo y el empleo	109
	2. Ahorro, inversión y gasto público	111
	3. El papel del Estado	115
	Conclusiones	121



Introducción





Las crisis económicas, como todas las emergencias, no sólo son dañinas en sí mismas, sino también por los peligros derivados de la forma en que son afrontadas. Un naufragio estrecha dramáticamente las opciones de los pasajeros, pero además multiplica los perjuicios que pueden ocasionar las decisiones equivocadas del capitán. Ante la crisis, por tanto, es urgente adoptar justo la actitud contraria a la de precipitación y pánico que naturalmente promueve la situación.

Este libro brotó de nuestra preocupación ante cinco puntos de vista –tres diagnósticos generales y dos recomendaciones específicas– que hoy suscitan un asentimiento casi universal. Dan lo mismo el gobierno de que se trate o el partido político que lo sustente, dan lo mismo las ideologías e ideologías. De pronto las diferencias políticas o doctrinales que parecían insalvables son ahora apenas matices dentro de una interpretación que, edificada en torno a esos cinco puntos de vista, adolece a nuestro juicio de una doble debilidad: no se trata tan sólo de cinco errores, sino además de errores que apuntan todos en la misma dirección, la de justificar el recorte de la libertad de los ciudadanos.

De ahí el libro y de ahí su estructura, porque dedicamos un capítulo a cada error. El capítulo 1 aborda la idea de que la culpa política de la crisis es del liberalismo. El lector reconocerá esta opinión fácilmente,

porque ha sido repetida hasta el hartazgo en todos los medios de comunicación, que han coincidido en describir la realidad que ha precedido a la crisis como una realidad marcada políticamente por un Estado ausente. Así, los observadores se regodean hablando de un capitalismo neoliberal, un mercado omnipotente, una economía descontrolada y hasta de un festín desregulador. Este diagnóstico es tanto más asombroso cuanto que su refutación es muy sencilla: basta con mirar lo que esos Estados supuestamente en retirada hicieron en la práctica. Y lo que hicieron en la práctica es que no se retiró ninguno. En países como España las Administraciones Públicas no sólo no se redujeron, sino que se expandieron espectacularmente. La desregulación no fue la regla en ninguna parte del mundo.

El capítulo 2 lidia con una cuestión ética: ¿fue la codicia la culpable moral de la crisis? Muchas voces así lo proclaman, como si fuera evidente que los seres humanos nos hemos pervertido en tiempos recientes. Nosotros preferimos, por el contrario, arrojar una sombra de duda sobre esta explicación y sobre las prédicas apocalípticas que reclaman magnas regeneraciones éticas que sistemáticamente subordinan la libertad y la responsabilidad individual.

El diagnóstico económico predominante sobre la crisis subraya el papel crucial que en la misma ha cumplido el mercado libre. Es un error al que dedicamos el capítulo 3. Allí prestamos bastante atención al dinero y las finanzas, porque la crisis ha sido originalmente financiera y porque la banca y las finanzas, al revés de lo que habitualmente se supone, están lejos de ser actividades caracterizadas por la libertad. Estudiamos allí, pues, el sistema bancario y explicamos la relación entre el intervencionismo de las autoridades y la burbuja cuya explosión nos ha conducido hasta aquí.

Los dos últimos capítulos desmontan sendas recomendaciones que han obtenido un respaldo generalizado. El capítulo 4 impugna la supuesta inevitabilidad de los rescates bancarios. Revisamos las tres estrategias que en líneas generales se están aplicando en todo el mundo –los llamados modelo irlandés, modelo estadounidense o español, y modelo inglés–, planteamos críticas a estos tres esquemas, por ser ineficaces y onerosos, y presentamos una propuesta alternativa

frente al intervencionismo y también frente a la quiebra generalizada y desordenada de los bancos, propuesta alejada del rescate público y que estriba en primar la protección a los acreedores, aunque no a costa del contribuyente.

El capítulo 5 enfrenta la principal, la más generalizada y la aparentemente más inobjetable estrategia de política económica para salir de la crisis: la necesidad de aumentar el gasto público para crear empleo. Aquí explicamos que la clave no es fomentar el consumo sino el ahorro, que el Estado intervencionista no crea riqueza y empleo sino que los destruye, y no propicia la seguridad y la confianza sino que las debilita.

No cabe deducir del papel nocivo del Estado el que su papel para resolver la crisis deba ser nulo. Al contrario, la recuperación rápida exige tres condiciones: ajustar los precios relativos, recolocar los factores de producción y fomentar el ahorro. En estos tres puntos la influencia del Estado es decisiva y puede y debe cumplir un importante papel flexibilizando mercados (no sólo el laboral), agilizando procesos judiciales, eludiendo rescates de sectores quebrados, y reduciendo intensamente el gasto público y los impuestos sobre familias y empresas.

Incluimos finalmente un resumen con las principales conclusiones de nuestro trabajo.

1

La culpa política de la crisis es del liberalismo



En uno de sus cuentos Borges refiere las aventuras de un misionero escocés que en tierras remotas predica el cristianismo ante unos reticentes aborígenes que rehúsan abandonar a sus hechiceros, a los que consideran todopoderosos porque son capaces de transformar a los hombres en hormigas. El misionero se niega a creerlo, y los nativos replican que se lo van a demostrar. A continuación le enseñan ¡un hormiguero!

Esta misma chocante actitud, que pretende ver hechos en lo que sólo son prejuicios, ha predominado nuevamente a propósito de la crisis económica que, iniciada a mediados de 2007 en Estados Unidos, se extiende hoy a buena parte del mundo. Por todas partes los ciudadanos reciben el mismo mensaje: la crisis se ha producido porque los Gobiernos han renunciado a gobernar, han abdicado de sus responsabilidades, se han retirado o se han reducido, dedicándose a privatizarlo todo y a desregularlo todo, concediendo así a sus súbditos una libertad excesiva que éstos no han podido o no han sabido administrar correctamente. La crisis, pues, probaría que el culpable político es el liberalismo.

1. El neoliberalismo

El liberalismo rara vez es mencionado por este nombre, porque lo habitual es que se utilice la expresión neoliberalismo como el gran

chivo expiatorio de los males de la humanidad. Sin embargo, la definición de neoliberalismo tiene por regla general sólo dos posibilidades: o quiere decir cualquier disparate o quiere decir el liberalismo de toda la vida, con lo cual el prefijo *neo* resulta prescindible.

La expresión neoliberalismo se generaliza en los noventa, pero su origen, aunque no está del todo claro, sí es claramente anterior, y se habló de neoliberalismo en los años treinta, si no antes. No entraremos aquí en esta historia, donde se mezclan consideraciones puramente analíticas con consideraciones de oportunidad política o de otro tipo, aunque sí cabe constatar tristemente la habitual maestría retórica del antiliberalismo, que hace que en el idioma inglés la palabra liberal signifique socialista, o que para nuestros socialistas el liberalismo de los liberales sea falaz conservadurismo y que el liberalismo genuino sea en realidad socialista. Estas trampas las efectuaron desde antiguo algunos liberales contra sí mismos. Por ejemplo, en los años cuarenta un grupo de destacados liberales alemanes emprendió uno de los tantos intentos que ha habido de armonizar libertad y coerción, y pretendió defender la economía de mercado pero también la intervención del Estado para proteger la libertad y propiciar la justicia social, probablemente la ficción política contemporánea más extendida y también más peligrosa, porque arrebatar a los ciudadanos lo que es suyo nunca puede ser justo. Estos destacados liberales alemanes procuraron separarse del liberalismo decimonónico, al que acusaron, típicamente, de ser demasiado radical y haber dado lugar a empresas amenazantes, porque su poder rivalizaba con el de los estados, cuya misión, por tanto, no podía ser mantenerse al margen, sino que debían intervenir para garantizar la competencia. Fue la llamada «economía social de mercado», que siendo antisocialista también fue anticapitalista y plasmó nuevamente, como se había hecho antes y se haría después hasta nuestros días, la cálida fantasía de que el objetivo es un delicado equilibrio entre Estado y mercado, entre comunidad y persona, entre razón y voluntad, entre justicia social y liberalismo, es decir, el equilibrio engañoso entre coacción y libertad, que elude la consideración de que el Estado, y sólo él, es el monopolista de la violencia legítima, con lo que no puede ser tratado como si fuera una simple parte de una transacción. Ese liberalismo de raíces germánicas, que algunos

llamaron neoliberalismo, ignoró esta dificultad, como ha sucedido sistemáticamente, y desapareció por la sencilla razón de que se convirtió en el credo universal: todos los políticos de todos los partidos de todos los países pasaron a compartirlo y de hecho lo comparten hoy.

Cuando a finales del siglo XX se volvió a agitar el neoliberalismo, la situación había cambiado, en particular a partir de 1989, cuando un colapso político sacudió profundamente a muchos intelectuales que habían destacado por defender el comunismo o por matizar sus deficiencias.

La caída del Muro de Berlín debió ser saludada como lo que fue: una de las mejores noticias desde el principio de los tiempos. Se agotaba, en efecto, el sistema político más brutal que haya padecido la humanidad, responsable de la muerte de cien millones de trabajadores y de la opresión y el empobrecimiento de miles de millones.

Jamás obtuvieron los comunistas el respaldo de los pueblos, y por eso tomaron el poder por la fuerza y establecieron las dictaduras más sanguinarias, que no por ello arredraron a escritores y artistas, que los respaldaron con gran entusiasmo y, por tanto, se sumieron en la zozobra y el desconcierto cuando el derrumbe del Muro exhibió ante los ojos de todos el carácter metódicamente criminal del llamado «socialismo real».

Esto explica la extraordinaria respuesta que tuvo la crisis del comunismo: en lugar de desatar una ola de alegría y felicidad, desató una ola contraria. El planeta, se nos aseguró a través de los medios de comunicación y en las voces de los principales pensadores, no había recibido una buena nueva, sino una malísima: se iba a imponer la asfixiante hegemonía de Estados Unidos y las empresas multinacionales, aumentarían la pobreza y la desigualdad, la degradación de la naturaleza y del medio ambiente, y hasta la diversidad mental sería arrasada por la uniformidad intelectual del llamado «pensamiento único». Todos estos desastres se iban a producir como consecuencia de la globalización y el neoliberalismo.

Fueron pocos los que protestaron ante tan fabulosa distorsión. En efecto, la hegemonía opresiva, la pobreza, la desigualdad, la destrucción ecológica y la imposición de un solo pensamiento no eran amenazas futuras, sino precisamente los ingredientes fundamentales del resquebrajado comunismo, cuyos partidarios optaron por ocultarlos y rápidamente se los endilgaron al mundo no comunista, donde no habían existido, ni existían, ni iban a existir en un grado comparable.

Esta operación de propaganda, jaleada como siempre por el grueso del denominado «mundo de la cultura», era una mentira tan flagrante que sus partidarios no pudieron persistir en ella sin costes de todo tipo, incluidos los políticos. De ahí el júbilo que la crisis actual ha provocado en tantos intelectuales: por fin pueden dar rienda suelta al resentimiento que abrigaban tras el fracaso del comunismo, al que se habían unido también los costes del intervencionismo en muchos países democráticos en términos de impuestos y de paro. La crisis económica de 2007 en adelante parecía dar la razón por fin a quienes habían augurado desde 1989 infinitas desgracias que aún no se habían producido. El neoliberalismo era efectivamente el peligro que tantas Casandras venían anunciando. Los datos estaban ahí, ratificadores como el hormiguero para los nativos del cuento de Borges.

2. Las claves liberales

Pero el neoliberalismo, la doctrina que servía de brújula a la maligna globalización, no parecía tener un contenido preciso. En un diario español se lo definió seriamente como la doctrina que recomienda bajar los impuestos, ¡pero sólo a los ricos! Se llegó a afirmar también con toda seriedad el disparate de que el modelo neoliberal había sido plasmado por unos gobernantes europeos y latinoamericanos durante cuya gestión aumentaron el gasto público, los impuestos y la deuda pública, los tres a la vez, y en ocasiones cuando al mismo tiempo se cerraban algunos mercados a la competencia exterior.

Ahora bien, el neoliberalismo sí tiene sentido cuando es definido como la defensa de la libertad individual, particularmente de la propiedad privada y los contratos voluntarios. Estos dos contenidos, sin

embargo, definen el liberalismo desde siempre, con lo que aquí emplearemos esa expresión, dejando el prefijo *neo-* para quienes tengan tiempo y ganas de confundir a la opinión pública.

No pueden haber dudas de que las claves del reproche político pasaban por el liberalismo, así entendido al modo más tradicional. Para poner énfasis especial en la crítica de las estrategias equivocadas que habrían conducido al mundo al desastre económico se emplearon asimismo unas muestras de renovada retórica como «ultraliberalismo» o «fundamentalismo de mercado», además del clásico espantajo del «capitalismo salvaje». Estas expresiones son interesantes y reveladoras, porque ninguna de las tres ideas –ultra, fundamentalismo y salvaje– tiene connotaciones que no sean peyorativas. Digamos, uno nunca definiría a la Madre Teresa como una mujer ultrasolidaria, o fundamentalista del amor al prójimo, o salvaje partidaria de los menesterosos de Calcuta. La prueba de la intencionalidad de tales locuciones es que jamás son utilizadas para referirse al socialismo.

Pero aparte de lo peyorativo, el diagnóstico estaba claro: lo que había sucedido, especialmente tras 1989, era una suerte de bandazo hacia un liberalismo exagerado. El apego a fantasías centristas llevó a muchos a concluir que la caída del comunismo había desencadenado una reacción capitalista análogamente excesiva y reprochable.

3. Cuestión de modelos

El uso de términos tales como capitalismo y socialismo resulta descriptivo, y en tal sentido es útil, pero debe quedar claro que se trata de tipos ideales, no de realidades tajantes. Esta consideración es pasada por alto por quienes abusan de la idea de modelos, como si el mundo real estuviese formado por esquemas políticos nítidos. Un ejemplo muy utilizado en tiempos recientes es la contraposición entre un supuesto modelo norteamericano, caracterizado por la libertad, y un modelo europeo, caracterizado por la intervención gubernamental.

En realidad, lo que existe en todo el denominado mundo capitalista es una serie de variantes de un sistema híbrido entre libertad y coacción.

No hay un modelo capitalista, porque en todos los países llamados capitalistas la propiedad privada y los contratos voluntarios son abiertamente condicionados por la política y la legislación. No sólo no es cierto que Estados Unidos sea un país paradigmáticamente liberal, sino que allí la intervención política es parecida a la que padecen los ciudadanos de otras latitudes. No pretendemos defender la tesis de que todo el mundo capitalista es idéntico —es claro, por ejemplo, que el comercio está menos intervenido en Nueva York o San Francisco que en Barcelona o París—, pero sí que sus diferencias resultan a menudo exageradas sobre sus coincidencias. Estamos, pues, ante casos de la llamada «economía mixta», expresión en la que cabe reiterar que sus componentes, el Estado y el mercado, no son socios parejos en su poder.

Cabría argumentar que si no hay un modelo capitalista, tampoco hay un modelo socialista, y que ningún país se acercó al esquema teórico de la abolición completa de la propiedad privada y la libertad. Es cierto. Quizá Camboya, Corea del Norte o Albania se acercaran al ideal, pero seguramente podríamos encontrar incluso en esos infiernos socialistas alguna muestra de propiedad privada y contratación voluntaria.

Otra vez, no estamos diciendo que la ausencia de modelos comporte la identidad de las realidades. Es evidente que si los mismos cubanos que sufren persecución y pobreza en La Habana encuentran sosiego y prosperidad en Miami ello no es un resultado casual, y tampoco era por azar que las condiciones políticas y económicas eran vastamente mejores para los habitantes de la Alemania capitalista que para los de la Alemania comunista, y lo son hoy para los del Sur de Corea con respecto a sus hermanos del Norte.

Conviene tener en cuenta estos matices, porque fueron pasados por alto tanto antes de la crisis como a partir de su estallido. Antes de ella, reveladoramente, se dejó de hablar del capitalismo, nombre que fue reemplazado por el de globalización, que en realidad significaba lo mismo, porque se achacó a la globalización unas perversiones similares a las capitalistas. El hecho de que se empleara un nuevo término quizá tenga que ver con la inmediatez de la implosión de la

URSS, que tornaba ridícula la condena del capitalismo dados los resultados visibles e incuestionables del socialismo real. El paso del tiempo y una nueva perturbación económica autorizaron a los bienpensantes a archivar la globalización y a volver a agitar el fantasma siniestro con su nombre primigenio. Así, ahora no se habla de la crisis de la globalización, sino de la crisis del capitalismo.

4. La gran ficción del Estado ausente

Dicho lo anterior, sin embargo, sigue en pie la acusación de que el responsable político de la crisis es el liberalismo al haber apostado los gobernantes por una reducción del papel y el peso de las Administraciones Públicas. En efecto, aunque todos aceptemos que no hay paradigmas perfectamente estilizados, y que por tanto no atravesamos una crisis del capitalismo porque no hay tal cosa como un modelo capitalista coherente o pleno, el liberalismo no queda exculpado. Incluso reconociendo la realidad política como un híbrido de libertad y coacción, no hay razón alguna para postular que la composición del híbrido está, haya estado o deba estar petrificada. Por lo tanto, si el peso de ambos componentes se hubiese modificado apreciablemente en las últimas décadas, ampliándose el campo del mercado y reduciéndose paralelamente el de la intervención, entonces quienes acusan al liberalismo tendrían, si no un argumento lógico, al menos uno cronológico: después de unas políticas liberalizadoras sobrevino una catástrofe económica. Esta precedencia es presentada como innegable, puesto que la reducción de los Estados, la privatización y la desregulación parecen hechos que están fuera de toda discusión. En el capítulo 3 nos ocuparemos de la lógica económica, es decir, de si la crisis ha sido la consecuencia de un mercado libre. En el presente capítulo abordaremos la cuestión de si realmente la política ha dado los pasos atrás que los antiliberales de izquierdas y derechas proclaman que ha dado.

Empecemos por la privatización, porque parece una realidad indudable. No es materia opinable que antes había muchas y grandes empresas públicas y que en las últimas décadas su propiedad ha pasado del Estado a los individuos. Auténticos emblemas de la política nacional –pensemos, por ejemplo, en empresas petrolíferas o en

líneas aéreas— que a menudo utilizaban como logotipo los colores de las banderas patrias dejaron de depender de la política y saltaron al mercado.

Aquí podría matizarse el argumento. Después de todo, en no pocos casos los Estados mantuvieron mecanismos de control en las empresas privatizadas, y asimismo no se puede hablar de una auténtica privatización cuando el Estado privatiza pero no desmonopoliza al conceder privilegios anticompetitivos a algunas empresas, o cuando se reserva el control de las tarifas, tal como sucede con bastantes servicios públicos privatizados. Esto es verdad y enlaza con la ficción que mencionamos antes al respecto de la supuesta economía liberal o capitalista, que sólo existe en la imaginación, porque en la práctica los gobernantes controlan empresas y mercados, cosa que los agentes y empresarios saben muy bien, y de ahí la práctica generalizada de la presión a las autoridades para obtener favores y el habitual trasiego de personajes de la vida política que pasan a ocupar jugosos cargos en la empresa o las finanzas privadas sin que nadie se escandalice.

Pero a pesar de todo sigue siendo cierto que la privatización existió. La pregunta es: ¿avala esta privatización la tesis de que, aun en términos relativos, hemos asistido a un período marcado políticamente por una libertad excesiva y un Estado ausente?

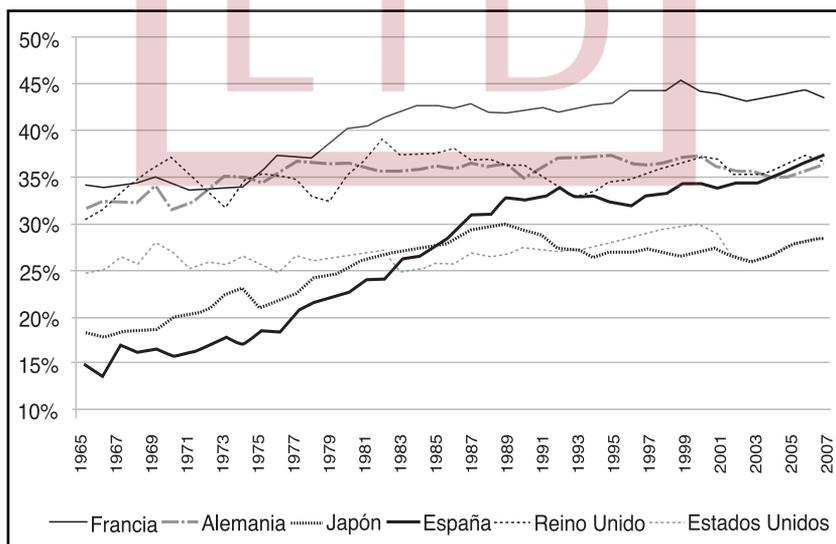
Para responder a esta pregunta conviene eludir una simplificación, que considera que el Estado es uniforme, que está inmovilizado en sus contenidos, y que por tanto la cuestión de la libertad y la coacción sólo obliga a atender a lo que ya hace: si deja de hacerlo, entonces eso significa que su presencia efectivamente se contiene o reduce. La privatización de empresas públicas, aun con los matices que hemos señalando, probaría la tesis del retroceso del Estado.

El error estriba en que la premisa es falsa: el Estado no es siempre uniforme ni está petrificado en sus contenidos. Más bien al contrario, porque su perfil puede cambiar y sus contenidos también, con lo cual es teóricamente posible que el peso de la coacción política disminuya en un campo y aumente en otro, y también es teóricamente

posible que en ese juego de luces y sombras la coacción del conjunto no registre cambios apreciables –y desde luego ningún cambio a la baja–. Si pasamos de la teoría a la práctica vemos que eso es exactamente lo que ha sucedido en las últimas décadas: la prédica sobre la ola liberal o el desmantelamiento del Estado contrasta con el hecho objetivo de que el peso de la política, el coste de las Administraciones Públicas, no disminuyó prácticamente en ningún país del mundo.

Estos cambios de formas políticas no son irracionales ni arbitrarios. Pero tampoco obedecen a oleadas de principios que infundan a la política un criterio general diferente del anterior. Si los que acusan al Estado de haberse retirado y haber privatizado con desmesura tuvieran razón, deberíamos haber contemplado una privatización efectivamente generalizada. En cambio, se privatizaron empresas públicas de telefonía, pero no las televisiones públicas, con lo cual hay un fenómeno que requiere una explicación y que evidentemente no puede pasar por una supuesta batida en retirada de la política ante el empuje estaticida del liberalismo.

Cuadro 1.1. Presión fiscal en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB)



Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Un argumento más razonable subrayaría la importancia de la legitimación del poder. Ningún Estado, democrático o no, puede mantenerse ante la rebelión abierta de sus súbditos. El poder, por tanto, siempre busca legitimarse. Pero el grado de legitimación puede ser muy distinto según sean las múltiples actividades que las Administraciones Públicas encaran, controlan o directamente protagonizan.

Esto permite explicar la privatización de las empresas públicas, por la sencilla razón de que se había extendido ya en los ochenta un consenso sobre ellas, que solía subrayar aspectos muy negativos: se trataba de gigantes burocráticos notablemente ineficientes y onerosos en manos de mafias políticas y sindicales que hacían allí de su capa un sayo, pero no eran capaces de brindar un servicio mínimamente digno. Cuando en algunos países los ciudadanos no podían ni siquiera conseguir que la empresa estatal de telefonía les colocara algo tan simple, y tan apropiado para su negocio, como una línea de teléfono que funcionara, la legitimidad del Estado en ese caso se reducía rápidamente, porque entre otras razones los ciudadanos podían conocer que en otros países el mercado era capaz de brindar ese servicio en condiciones más que aceptables. Algo parecido sucedió en España cuando la población empezó a preguntarse si era lógico que volar en una línea aérea pública de Barcelona a Madrid fuera más caro que volar en una línea aérea privada de Barcelona a Londres.

Cuando el balance de legitimidad se desequilibra, los Estados actúan con racionalidad y se desprenden de aquellas actividades en las cuales el ejercicio de su coacción les reporta más inconvenientes que ventajas. La búsqueda oportunista de la legitimidad es lo que explica también el insólito fenómeno de que estos cambios se produzcan abrupta y simultáneamente. En efecto, la historia de la privatización de las empresas públicas en la década de los ochenta fue universal y daba igual el color político de los gobiernos: todos ellos se lanzaron a privatizar, como si fuera algo completamente evidente, cuando en realidad lo que sucedió es que muchos partidos políticos que protagonizaron la privatización habían sido con anterioridad entusiastas y en no pocos casos ejecutores de campañas opuestas. Este funciona-

miento político oportunista y general se ha vuelto a poner de manifiesto con la crisis, y así hemos visto que los partidos que pretendían diferenciarse entre más liberales y más intervencionistas confluyeron todos ellos sin distinción en que el mercado ya no valía y era imprescindible la misma acción política de la que muchos habían desconfiado antes. Los bandazos en los criterios políticos son, por tanto, la norma, y constatarlos sirve para echar un manto de sospecha sobre la idea de que la política puede resolver por su cuenta problemas sociales. Esto es un atajo que elude dos verdades incómodas. En primer lugar, la política crea problemas, y en segundo lugar, un aspecto que corresponde al capítulo 2: la política responde también a los valores morales de los ciudadanos.

5. Estado mutante y creciente

Probablemente el lugar más asombroso del planeta para sostener que la política se ha reducido es España, porque aquí el proceso de mutación del Estado no se limitó a mantener el peso de lo público, sino que lo incrementó de manera muy significativa. La mutación de por sí habría sido un hecho destacable, puesto que el Estado español se descentralizó dando lugar a unas Comunidades Autónomas cuyo peso aumentó sin cesar, mientras que el del Estado central se redujo en términos relativos. Pero en esta mutación la partida general no quedó en tablas, sino que ganó claramente el poder, porque el peso conjunto de las Administraciones Públicas creció proporcionalmente más en España que en ningún otro país. La mutación fue legitimada por la democracia, que también sirvió para contener la reacción del pueblo español, que soportó una aguda subida de la presión fiscal con la reiterada y falaz excusa de que en democracia el propio conjunto del pueblo, en realidad, la había reclamado.

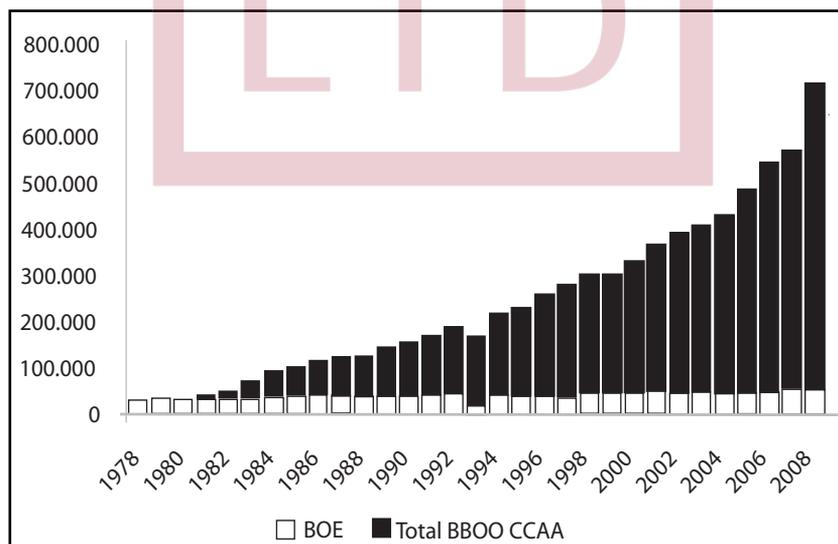
Por insólita que parezca esta idea que alude seriamente al supuesto clamor de las masas para que el poder les arrebate aún más bienes y libertades, en todo caso su desenlace está claro. En estos años de supuesto liberalismo a ultranza la política nunca se redujo y en algunos países creció. Aparecieron (otra vez, como unánimes rebaños) grandes ministerios y nuevas burocracias que nuestros abuelos habrían contemplado con estupefacción, y la regulación no sólo

no desapareció, sino que aumentó marcadamente. Pensemos sólo en ejemplos como la profusa, severa y costosa regulación medioambiental o las normas conforme a las cuales el poder determinará el sexo de los integrantes de los consejos de administración de las empresas privadas. Las regulaciones se multiplicaron en todo el mundo, agravándose en el caso de España por la propia subdivisión de la Administración y el surgimiento de las autonomías.

Si el intervencionismo se mantuvo o aumentó en España y en el resto del mundo, lo hizo no sólo según argumentaciones nuevas sino también teniendo en cuenta dos sumamente antiguas: la redistribución de la renta y la moneda.

La prédica políticamente correcta sobre la reducción del estado del bienestar es pura propaganda. Ese Estado redistribuidor no se contrajo en ninguna parte y en España aumentó significativamente. Cualquier medida del gasto redistributivo –sanidad, educación, pensiones– lo prueba sin asomo de duda.

Cuadro 1.2. Páginas de los Boletines Oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas



Fuente: Albert, R. y Biazzi, R., 17 de febrero de 2009: *Papeles Faes*, núm. 90.

El argumento de la redistribución, que justifica una amplia intervención en los mercados, también guarda correspondencia con otras intervenciones que, en el medio de una pretendida epidemia de servidumbre hacia el mercado, permanecieron incólumes y en muchos casos se expandieron. Así, resulta notable que la construcción haya sido demonizada como culpable de la crisis y ejemplo del ineficiente mercado libre, cuando se trata de un sector profunda y profusamente intervenido, desde el suelo hasta los paneles solares, desde la vivienda pública hasta toda suerte de inspecciones y gravámenes, sin contar con la manipulación monetaria y crediticia.

Analizaremos esta manipulación con detalle en el capítulo 3, pero cabe traer el tema a colación como ilustración definitiva de la cuestión política. Para contrastar la supuesta ola liberal con la realidad podemos pensar en la impresionante cantidad de actividades que el Estado no sólo realiza y controla, sino que protagoniza aparte del dinero. Ello sólo bastaría para aplicar sordina a la supuesta sobrecarga de liberalismo de los últimos tiempos. En efecto, un somero vistazo a lo que significa el peso público en la educación, la sanidad y las pensiones, y a las crecientes regulaciones que afectan a toda la vida de los ciudadanos –desde la fábrica que montan o el comercio que abren o la vivienda que adquieren o reforman, hasta su forma de comer, beber, conducir y hasta fumar– basta para calificar de monumental disparate la idea de que el liberalismo de nuestro tiempo ha pecado de excesivo.

Pero esto es aún más así en el campo monetario. Recordemos que aunque el protagonismo de las Administraciones Públicas es enorme en la educación, la sanidad o las pensiones, cabe concebir la prestación privada de tales servicios. Dicho protagonismo es virtualmente total en la policía, la defensa y la justicia, y sin embargo no está prohibido el suministro por parte de empresas privadas de servicios de defensa, seguridad y arbitraje. En cambio, lo que sí está completamente prohibido, en todos los países del mundo, es la fabricación de billetes, que en todo el planeta es siempre un monopolio público. En las finanzas, la oferta de crédito está controlada también universalmente por entidades públicas, que son los bancos centrales. Pero cuando estalla una crisis monetaria y financiera parece que el culpable es ¡el sector privado!

6. Y el culpable no es...

Un líder del socialismo español dijo: «Un mundo global basado en el liberalismo salvaje y en la eliminación de normas y controles es lo que nos ha llevado a la crisis». Este capítulo ha procurado demostrar que este diagnóstico claramente es falso.

Desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin se insiste en que la crisis no es sólo económica, sino también ideológica. Se afirma sin rubor que estamos asistiendo a una «crisis de la ideología de lo privado», y que es menester alcanzar «un nuevo equilibrio entre lo privado y lo público». Algunos, con un respiro de alivio, diagnostican con pretensión de objetividad: «el Estado vuelve a ponerse de moda» y «vuelve la política». Lo sostienen todos los políticos de todos los partidos, incluso los que se profesan liberales. Hay quien seriamente plantea que el liberalismo está bien, pero sólo en épocas de prosperidad, o quien postula sin titubear que el liberalismo es compatible con el actual Estado intervencionista y redistribuidor, y asegura que la igualdad que debe prevalecer no es la igualdad liberal, la igualdad ante la ley, sino la igualdad intervencionista, la igualdad mediante la ley.

En ese mundo políticamente correcto de cálidas contradicciones muchos se sienten cómodos en la imposible persecución de objetivos incompatibles. Una contradicción típica es la regularidad que prueba que se sale de todas las crisis económicas con menos libertad y más regulación, pero cuando llega la siguiente crisis, el pensamiento prevaleciente la atribuye sistemáticamente a un exceso de libertad y a una falta de regulación.

Denunciamos esa contradicción. No pretendemos monopolizar la verdad, pero sí podemos señalar que en la práctica la política no debe volver porque nunca se marchó, y que echarle la culpa política de la crisis al liberalismo es un error.